

EL MUNICIPIO

PUBLICACION MUNICIPAL
NUEVA ERA.

AÑO XIII

Quito, Febrero 26 de 1897.

NUM. 37

SUMARIO.

- 1 Acta del "Comité Diez de Agosto".
- 2 Actas de los días 12, 14, 16 y 19 de Enero de 1897.
- 3 Avisos.

1

"COMITE DIEZ DE AGOSTO".

Sesión del 8 de Febrero de 1897.

La abrió el Sr. Presidente Dr. Carlos R. Tobar, con los Sres. Dr. Lino Cárdenas, Presidente del Concejo Municipal y D. Alejandro Saa, Tesorero del Comité.

Leída y aprobada el acta de 15 de Enero, se dió cuenta con la siguiente contestación del Dr. J. R. Quevedo, al nombramiento de Presidente del Sub-Comité de Guayaquil:

"Guayaquil, Enero 27 de 1897.

Sr. Presidente del Comité Central del "Diez de Agosto".—Quito.

Señor:

Tuve la complacencia de recibir el apreciable oficio de Ud., del 16 del presente, contraído á manifestarme que el Comité Central del "Diez de Agosto", en el cual preside Ud. dignamente, se ha servido honrarme con el nombramiento de Presidente del Sub-Comité que existe en esta ciudad.

Por el deseo de coepearar siquiera en mínima parte á la consecución de los levantados propósitos del Comité, acepto el expresado cargo, y espero que se digne Ud. darme razón de las reglas á que deba someterme y de los nombres de las personas que forman aquí el Sub-Comité.

Sírvase hacer presente mi reconocimiento al Comité Central por la confianza con que ha distinguido á su muy atto. y S. S.

J. R. Quevedo".

El Sr. Presidente insinuó la necesidad de nombrar miembros de dicho Sub-Comité, porque, habiéndose pasado largo tiempo desde que se hicieron los nombramientos primitivos, hoy no se sabía si los designados permanecen en esa ciudad. En consecuencia, por unanimidad de votos, fué nombrado Vocal de aquella Junta, el Sr. Dr. Isaías Gómez Carbo, y se reservó para otra sesión el nombrar el otro ó los otros vocales.

Se dió lectura de la carta contestación del Dr. Quevedo á otra del Sr. Presidente, concretada á darle instrucciones para la recaudación de los fondos pertinentes al Comité.

Luego el Sr. Presidente dijo: "Reorganizado el Comité con personas tan activas y patriotas como el Sr. Dr. Cárdenas, Presidente del Concejo, el Sr. D. Jenaro Larrea, el Sr. D. Alejandro Saa y el Sr. Secretario de la Municipalidad, el pe-

núltimo Señor fué elegido Tesorero de la Corporación, y en tal virtud, ingresaron en su poder las varias sumas que nos había sido dado coleccionar en Quito, á saber: los S/ 749-65, que yo había depositado en Guayaquil, según vale N° 1578 de principios de Noviembre de 1894, que por concesión especial del Gerente del Banco Internacional ganaban el 6% y que, por desgracia, durante mi separación del Comité, quedaron sin interés alguno por olvido en la renovación del depósito; cantidad que el nuevo Comité dispuso se trasladase á Quito y se trasladó, en verdad, con el aumento de intereses y del $\frac{1}{2}$ % de premio, el mayor que el Sr. Tesorero pudo obtener del informante, en época en que la abundancia de letras sobre Guayaquil hizo que el mismo Sr. Presidente del Concejo de entonces, el Sr. D. José María Salvador, autorizase al Sr. Saa para la venta de la letra hasta por $\frac{1}{4}$ %. Los S/ 749-65 ascendieron, pues, á S/ 776, esto es, más 22-49 de intereses y 3-86 del premio sobre Guayaquil. Los 749-65 provenían de S/ 700 donados, si no me equivoco, en dos partidas (una de á 500 y otra de á 200) por el I. Concejo, y de una pequeña dádiva del que habla, menos 0.35 descontados por el Gerente del Banco Internacional "por portes de correo", según carta suya de 14 de Noviembre de 94;

S/ 167-55, en un pagaré del Sr. A. Ponce E. y provenientes, según supongo, de S/ 60 regalados por el Sr. Dr. D. Antonio Flores, S/ 20 entregados en Quito por el Sr. José I. Proaño, por orden del donante Sr. D. F. J. Icaza, y otras dádivas que ignoro ó no recuerdo;

S/ 100 remitidos de Guayaquil por el Sr. D. Francisco Fernández Madrid; y

S/ 500 último donativo de la pa-

triotra Municipalidad de Quito.

No debe extrañar el Comité el que no me sea posible señalar de manera cierta el origen de las sumas expresadas, ya que, como Presidente del Comité, no he podido conocer lo relativo á colectas sino, lo mismo que los demás miembros, por las razones presentadas en las Juntas respectivas por el Sr. D. Vicente Lucio Salazar, 1.º Tesorero del Comité y posteriormente por informes del Sr. Tesorero Municipal y del Sr. D. Alejandro Saa.

Respecto de los fondos colectados en Guayaquil, el Comité sabe ya que la inopinada muerte del Sr. Dr. D. José Gómez C. ha traído algunos tropiezos á la averiguación de las seguridades de esos fondos; mas sábase también que existen S/ 1000 en el Banco del Ecuador de cuenta de los S/ 1708.04 que, según carta de 20 de Febrero de 1895, tenía el Sr. Gómez C. en los Bancos de Guayaquil; el Sr. Dr. D. Rafael Quevedo ha obtenido, además, del hermano del fallecido la oferta de examinar los papeles de éste y descubrir el paradero de las sumas, de las listas de contribuyentes &c., que D. José prometía, en correspondencia de Ambato de 25 de Febrero de 96, remitir al Comité tan pronto como regresase á Guayaquil.

De la colocación de los fondos, dará razón el honorabilísimo Tesorero actual del Comité Sr. D. Alejandro Saa.

He insistido en pormenores minuciosos acerca de los S/ 749-65, trasladados, por orden del Comité, de Guayaquil á Quito, para colocarlos en poder del Concejo Municipal, con un interés muy superior al que pagan los Bancos; he descendido, digo, á pormenores minuciosos, á causa de que el Sr. Gerente del Banco Comercial y Agrícola, en contestación á in-

vestigaciones mías tocante á los fondos colectados por el Sr. Dr. Gómez C., parecía confundir dichos fondos con los depositados por mí, esto es con los referidos S/ 746-65, suma que remití de Quito en 7 de Noviembre de 94, como puede verse en la carta adjunta del Sr. D. Clímaco Gómez V. Gerente entonces del Banco Internacional, al que reemplaza hoy el Comercial y Agrícola. Vosotros conocéis tanto como yo, los peligros de pérdida del vale de depósito N° 1578 correspondiente á los S/ 749-65 que nos ocupan, confundido entre los papeles del archivo de la Municipalidad durante más de un año, y en contrario, merced á mis insistentes oficios, á pesar de no pertenecer en aquella época al Comité.

El pago en Guayaquil de los S/ 749-65 se hizo tres ó más semanas después de haberse remitido cancelado el vale que estaba á mi orden, por haber exigido el Sr. Gerente que lo cancelara, además del Presidente del Comité, el Tesorero Sr. D. Alejandro Saa quien, lo he expresado ya, colocó esa suma (acrecida por los intereses de seis meses del depósito en el Banco Internacional, y por el premio del traslado á Quito) en poder de esta I. Municipalidad, á cuyos esfuerzos principalmente se deberá la satisfacción de nuestra deuda de gratitud á los próceres del 10 de Agosto de 1809.

El Gobierno no ha podido aún entregarnos los S/ 500, que, si no estoy equivocado, hasta ordenó á Tesorería nos fuesen entregados, en tiempos de ocupar el Ministerio de Obras Públicas uno de los actuales miembros del Comité, el Sr. D. Jenaro Larrea".

Se acordó trasladar á la Caja del Comité Central los fondos que existen en Guayaquil, y que, al efecto, se remita al Sr. Presidente del Sub-

Comité de esa ciudad, autorización firmada por los Sres. Presidentes del Comité y del Concejo Municipal y por el Secretario, para que perciba el valor de los depósitos hechos en los Bancos por el Sr. Dr. José Gómez C. y cualquiera otro perteneciente al Comité, con encargo de remitirlos á la expresada Caja.

Se acordó publicar esta acta en los periódicos "El Nuevo Régimen" y "El Municipio".

Terminó la Junta.

El Presidente, *C. R. Tobar.*

El secretario, *D. Román.*

ACTAS MUNICIPALES.

2

5ª Sesión ordinaria del 12 de Enero de 1897.

Abierta con los Sres. Presidente, Andrade, Ante, Balarezo, Escudero, Vivanco, Procurador Síndico y Tesorero, se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Se leyeron los siguientes informes sobre un proyecto de Ordenanza de tarifa de coches de alquiler:

"Sr. Presidente:—Vuestra Comisión encargada de informar acerca del proyecto de reglamentación de las empresas de coches, diligencias, carros mortuorios etc., presentado por el Sr. Sub-Intendente de Policía, lo hace en los siguientes términos: Aun cuando es verdad que en casi todos los países del globo se hallan reglamentadas estas industrias, y fuera muy importante que también aquí lo estén, sin embargo no han encontrado una ley que lo autorice; y al hacerlo parece que se ataca á la propiedad y á la libertad de industria; pero, como el I. Concejo está en el deber de evitar los abusos que vienen en daño de sus habitantes, es de parecer la Comisión que se pida autorización á la Asamblea, para reglamentar, por lo menos, la empresa de los carros mortuorios, cuyos exagerados precios son ciertamente una calamidad que asalta á los desgraciados, en momentos del mayor dolor, la pérdida de seres queridos. Cree también la Comisión que la Autoridad

de Policía puede hacer las indicaciones necesarias para determinar los sitios donde deben permanecer los coches de alquiler y obligarles á que las tarifas impuestas por los propietarios existan en cada coche, así como también todo lo conducente al buen arreglo y administración de esta empresa. Este es el parecer de vuestra Comisión, salvo el mejor acierto del I. Concejo.—Quito, Diciembre 11 de 1896.—Edmundo Catfort.—Lino Cárdenas”.

“Sr. Presidente:—He tenido á la vista el Reglamento para el servicio de carruajes y carretas dado por el Presidente, Sr. Dr. D. Antonio Flores, en 1890 y el inciso 3º del art. 30 de la Ley de Régimen Municipal. Estos documentos no han variado el parecer de la Comisión, en lo principal; pero sí en lo que toca á reglamentar todo lo concerniente á la buena administración de las empresas de carruajes, para lo cual la Autoridad de Policía no tiene que hacer otra cosa, que poner en práctica el Reglamento dado por el Presidente Flores, salvo el más ilustrado parecer de este I. Ayuntamiento.—Quito, Enero 12 de 1897.—Lino Cárdenas”.

El Sr. Cárdenas dijo: Suscribí el primer informe antes de consultar la Ordenanza del Concejo Municipal de Guayaquil sobre tarifa de coches de alquiler, ni el Reglamento dado por el Ejecutivo en el año 1870; mas, previo estudio de esos documentos, y en vista del texto del art. 31 de la Ley de Régimen Municipal, he tenido por conveniente modificar mi parecer, como consta en el segundo informe leído, fundando tal modificación en la existencia de dicho Reglamento. Mas, enanto al proyecto de tarifa de coches, no he encontrado ninguna ley que faculte á las Municipalidades para imponerla; al contrario, el mencionado artículo es, sin duda, prohibitivo de tal facultad, y, por lo mismo, creo que la Ordenanza de la Municipalidad de Guayaquil no puede ser antecedente que sirva de norma á la de Quito. Por eso he dicho que no ha variado el parecer de la Comisión en lo principal.

El Sr. Escudero: Limitándose el primer informe á insinuar se recabe de la Legislatura la facultad de formular la tarifa para sólo los coches del servicio fúnebre, creo que la Comisión debe ampliar el informe en esta parte, á fin de que el Concejo pida tal facultad respecto de todos los coches de alquiler en general.

El Sr. Cárdenas: La Comisión ha creído conveniente que se pida tal facultad, á lo menos para los coches del servicio fúnebre, porque siendo pocas las empresas de este género, los precios de alquiler son demasiado costosos; enanto á las otras de coches comunes, como que va aumentándose su número, la competencia hará que los empresarios rebajen sus tarifas.

El Sr. Procurador Síndico pidió lectura del art. 31 de la Ley de Régimen Municipal, y leído dijo:

El texto de este artículo decide, á mi ver, la duda sobre si el Concejo tenga facultad para imponer tarifa á los coches de alquiler. La prohibición es clara, y al hacerlo el Concejo infringiría esa ley, y sin duda, iría el asunto á la Corte Suprema para que declare su invalidez, como sucede frecuentemente con Ordenanzas dadas por otros Municipios, según que lo he visto en ese Tribunal. Creo, pues, que lo acertado es recabar facultad previa de la Legislatura, quien la concederá, seguramente, ahora que, según sé, va á dar una ley sobre funerales.

Sometidos á votación dichos informes, fueron aprobados.

Se dió cuenta con los siguientes informes recaídos á la solicitud de Braulio Guerra, sobre rebaja del precio de remate del impuesto á la introducción de licores extranjeros:

“Sr. Presidente:—Bien puede ser que la introducción de licores extranjeros de este año haya sufrido detrimento y que, en consecuencia, sean innegables los relativos perjuicios del rematador. Pero este es un contrato como cualquier otro, en el cual se sobrentienden la contingente ganancia ó pérdida obligando en todo caso el rematador, sin que las pérdidas en un negocio sea motivo para disminuir su precio, ni la ganancia causa para elevar su valor.—Todo contrato lleva en sí un algo de aleatorio, de éxito contingente y dudoso, pues ninguna previsión alcanza á asegurar siempre resultados favorables. Además, la I. Municipalidad no tiene facultades suficientes para rebajar ni donar sus rentas, fruto de un negocio pactado en toda regla.—Quito, Diciembre 12 de 1896.—Federico Guillén.—Augusto Bueno”.

“Sr. Presidente:—El Sr. Braulio Guerra ha probado suficientemente las causas en que funda la solicitud de rebaja, en el precio del remate del impuesto de licores extranjeros; también está com-

probada su honradez y hombría de bien, así como, el perjuicio que sufriría el rematador al exigir el cumplimiento exacto del contrato. Por estas razones me separo del parecer de mis colegas y, creo que en equidad y justicia se le puede conceder una rebaja de la tercera parte de lo que adeuda el Sr. Guerra, salvo el más ilustrado parecer del I. Concejo.—Quito, Enero 11 de 1897.—Lino Cárdenas”.

El Sr. Andrade: No puede haber dos informes sobre un mismo asunto. Si el autor del segundo ha disentido del parecer de la mayoría de la Comisión, ha debido limitarse á salvar su voto.

El Sr. Presidente: Pues téngase como voto salvado, pero razonado, el informe segundo; y conerétese el debate al informe de la Comisión.

Leídas las solicitudes respectivas del peticionario Guerra y los documentos justificativos que las acompañan, el Sr. Tesorero dijo:

Es incontestable la poca introducción de licores extranjeros en el año pasado; mas creo que el Concejo no puede hacer la rebaja pedida, porque, según el contrato, el rematista ha aceptado las contingencias de ganancia ó pérdida. La rebaja implica una donación prohibida por la ley.

El Sr. Balarezo: Efectivamente la rebaja vale una donación. Si el peticionario se cree con derecho, puede ocurrir á los tribunales para que, previa prueba en forma legal de los hechos referidos en los documentos que ha presentado, se decida si el Concejo tiene obligación de hacer la rebaja que pretende.

El Sr. Procurador Síndico: Llevado el asunto al juez, creo que el peticionario obtendría buen resultado, puesto que no le sería difícil reproducir en forma las justificaciones con que ha presentado su solicitud. Para evitar tal juicio, el Concejo, por razón de los documentos justificativos, puede, fundado en ley y justicia, hacer la rebaja pedida, lo que no implica sino una simple transacción exigida por la equidad.

El Sr. Escudero: Atendiendo á la equidad, estaría por la rebaja; pero quiero saber con seguridad si el Concejo puede hacerla sin infracción de ley. Hasta consultar mejor esta, conviene suspender la votación.

El Sr. Balarezo: El punto de derecho es, en efecto, el que se debe estudiar previamente; y, como yo creo que puede el Concejo acceder á la rebaja, sin contrariar la ley, estaría porque aquella sea

un tanto proporcional al tiempo en que no hubo introducción de licores.

El Sr. Procurador Síndico: Si, como es cierto, el Concejo tiene perfecto derecho para administrar sus bienes, es indudable que lo tiene para acceder á la rebaja pedida. Al hacerla no haría sino evitar un juicio en que, probablemente, triunfaría el peticionario; puesto que en él demostraría la falta de introducción de licores, á lo menos en una gran parte del año, por causa de los acontecimientos públicos aludidos en los documentos justificativos en que apoya su petición.

Después de corto receso, se puso á votación dicho informe, y fué negado. En consecuencia, el Sr. Andrade, con apoyo del Sr. Balarezo, hizo la proposición siguiente: “Que se rebaje al peticionario un 10 % sobre el precio de remate del impuesto á la introducción de licores extranjeros”.

Puesta en discusión, el Sr. Vivanco dijo:

Creo conviene pasar el asunto á la Comisión de Peticiones, para que, con mejor estudio de los antecedentes, informe sobre un tanto de rebaja que sea más equitativo.

El Sr. Balarezo: Apoyé la moción trayendo á la cuenta que, á lo más, por seis meses ha disminuido la introducción de licores. La rebaja del 10 % sobre todo el precio de remate equivale á un 20 % sobre la cuota que el rematista ha debido pagar en los seis meses. Puesto que él mismo pide la rebaja de un 30 %, equitativo es el tanto fijado en la proposición; como que, por otro lado, natural es que también la otra parte pierda algo.

El Sr. Cárdenas: El tanto de la proposición no es equitativo, puesto que, según lo dice el Sr. Administrador del Hospicio en su informe, la cuota de ese impuesto perteneciente al Lazareto ha rebajado tanto en el año pasado, que, apenas alcanzará á la mitad de la de los años últimos.

El Sr. Procurador Síndico: Creo que la rebaja del 15 % sobre el precio de remate que, según se dice, es 4.000 \$, sería equitativa.

Sometida á votación la proposición disentida, resultó empate de votos. En consecuencia, según el Reglamento, debe continuarse el debate en la sesión siguiente.

Dada lectura á la solicitud del Sr. Carlos F. Madrid para que se le rebaje el precio de remate del impuesto sobre los estanquillos, correspondiente al año úl-

timo, y al informe consiguiente, el Sr. Escudero, con apoyo del Sr. Andrade, hizo la moción siguiente que fué aprobada: "Que vuelva el informe á la Comisión, para que exprese su parecer de una manera categórica, sobre todos los puntos que debe contener dicho informe".

Terminó la Junta.

El Presidente, *Lino Cárdenas*.

El Secretario, *D. Román*.

6.^a Sesión ordinaria del 14 de Enero de 1897.

Abierta con los Sres. Presidente, Andrade, Ante, Balarezo, Navarro y Procurador Síndico, se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior, con la modificación siguiente, pedida por el Sr. Balarezo, quien dijo que, al discutirse el informe recaído en la solicitud de Branlio Guerra, expuso su primer dictamen en estos conceptos: "La rebaja equivaldría á una donación, si el peticionario no se fundase en motivos que, aún llevados á los tribunales de justicia, serían capaces de producirle un resultado favorable; pero hoy vemos que los informes de personas conocedoras manifiestan la emergencia de accidentes fortuitos que han puesto la cosa arrendada fuera de las condiciones ordinarias que debieron ser tenidas en cuenta por los contratantes. Y si bien es verdad que dichos informes no revisten ahora la calidad requerida para hacer plena prueba legal, que es la que necesitaría el interesado, también es cierto, ó, por lo menos, muy probable, que las mismas personas que los han emitido bajo su palabra de honor, se afirmarían en ellos con juramento ante las autoridades, en cuyo caso ya se tendría dicha prueba. Yo estaré pues en contra del informe, puesto que, de otro lado, me parece clara la cuestión de derecho, esto es, la facultad que, para hacer una rebaja válida, tiene el Municipio como administrador de sus rentas".

El Sr. Andrade: Creo que, ante todo, debemos proceder á votar nuevamente la proposición que, según el acta leída, quedó pendiente.

El Sr. Balarezo: Puesto que apoyé esa proposición, tengo derecho á modificarla.

En consecuencia, con apoyo del Dr. Cárdenas, hizo la siguiente modificatoria, que fué aprobada: "Que se rebaje al peticionario un quince por ciento se-

bre todo el precio de remate del impuesto á la introducción de licores extranjeros, correspondiente al año pasado, con la condición de que reconozca que no tiene derecho á hacer judicial ni extrajudicialmente ninguna otra reclamación; lo que se hará constar en documento otorgado por el Sr. Guerra y el Sr. Procurador Síndico".

Se leyó un oficio del Sr. Gobernador de la provincia, quien contesta accediendo al préstamo de doce metros de hierro llanta, solicitado por el Sr. Presidente del Concejo, para un carretón del servicio del matadero. Se mandó archivar.

Leído el oficio del Sr. Intendente de Policía, en el que transcribe el del Sr. Comisario Alejandro Egas, quien se queja de que desobedece sus órdenes el Dr. Pazmiño, médico de reconocimientos y autopsias, se ordenó contestar á dicho Comisario, por órgano del mismo Sr. Intendente, recordándole que, según la ley, el mismo juez tiene suficiente facultad y medios para compeler á dicho Sr. médico, al cumplimiento de sus deberes.

Prevía lectura, se ordenó pasar á la Comisión de Policía, un oficio del Sr. Intendente, contraído á insinuar al Concejo el nombramiento de un facultativo, para que haga visitas domiciliarias, conducentes á mejorar la salubridad del lugar; y otro del Sr. Comisario Municipal 2.^o, quien pide al Concejo ordene la venta del caballo de su servicio y la compra de otro.

Se mandó pasar á la Comisión de Instrucción Pública una solicitud de la Sra. Avelina Cruz, quien pide útiles de enseñanza para la Escuela Municipal de los SS. CC.

Se aceptó la excusa de Vicente Terán, para no servir el cargo de juez 2.^o civil de la parroquia de Puéllaro y se nombró, para reemplazarlo, á Mariano Pabón.

Se negaron las excusas de los Sres. Julio Guarderas, Virgilio Ontaneda y Belisario Jarrín, para no servir los respectivos cargos de jurados principales, y se aceptó la del Sr. M. J. Barbano, nombrado jurado suplente. Para reemplazarlo fué nombrado, por unanimidad de votos, el Sr. D. José María Lasso.

Para Ingeniero Municipal é Inspector de Aguas fueron elegidos, por votación nominal, los Sres. Arturo Martínez y Abraham Carrera respectivamente.

El Sr. Procurador Síndico recordó ser necesario formar, cuanto antes, el presupuesto del año en curso, para el cual

dijo no ser obstáculo el que no se hayan hecho todos los remates de impuestos; porque, á falta de datos precisos, se puede tomar los que suministra el del año último.

Se ordenó pasar á la Comisión de Obas Públicas la solicitud del Sr. Manuel C. Rendón, quien pide se le exonere del pago de la cuota que le corresponde en el costo de la compostura de la calle en que está situada su casa.

Terminó la Junta.

El Presidente, *Lino Cárdenas*.

El Secretario, *D. Román*.

7ª Sesión ordinaria del 16 de Enero de 1897.

Abierta con los Sres. Presidente, Andrade, Ante, Balarezo, Bueno, Escudero, Navarro, Vivanco, Procurador Síndico, Tesorero é Ingeniero Municipal, se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Leído un oficio del Sr. Juez 1º de Letras, en el que expone que los nueve ciudadanos, cuyos nombres menciona, nombrados jurados para el presente año, desempeñaron ya tal cargo en el pasado, y pide, en consecuencia, que el Concejo nombre otros para reemplazar á aquellos, el Sr. Andrade observó que dicho juez no tiene facultad para hacer tal petición, ya que, según la ley, sólo el nombrado puede excusarse, fundándose en alguna de las causas determinadas por aquélla.

El Sr. Balarezo agregó que para deferir á la insinuación del Sr. Juez de Letras, sería necesario que el Concejo reconsiderase los nombramientos de los individuos indicados en el oficio, lo que no puede hacerlo, por haber pasado el tiempo oportuno, según el Reglamento Interno.

El Sr. Escudero: Los jurados indicados en el oficio no querrán, talvez, excusarse por haber servido su respectivo cargo el año último; en tal caso sus nombramientos serán legalmente válidos.

Ordenóse contestar al Sr. Juez Letrado en el sentido de aquellas observaciones.

Se aceptaron las exensas de los Sres. Dr. Aurelio Espinosa, Dr. Ulpiano Araujo, D. Enrique Bustamante, Dr. Maximiliano Donoso para no servir el cargo

de jurados principales; y las de los Sres. Carlos C. Espinosa y José María Lasso para no servir el de suplentes.

Para reemplazarlos fueron elegidos, para jurados principales, los Sres. Dr. Delfín Zambrano, Dr. César Vicente Pólit, Dr. Benjamin Jimenez y D. Manuel Váscos; y para suplentes, los Sres. Dr. Alberto Aguirre y D. Enrique Gango-tena.

Se leyó y aprobó el siguiente informe recaído en el oficio del Sr. Gobernador de la Provincia, quien pide copia de los documentos concernientes al arrendamiento acordado por el Concejo, de los impuestos sobre aguardientes.

“Sr. P. del C. C.:—Habiendo leído vuestra Comisión de Hacienda el oficio enviado á este Municipio por el Sr. Gobernador de la provincia, en fecha 9 de los corrientes y bajo el N° 18, oficio en el cual se piden los documentos concernientes al remate que el día 8 se ha verificado en la Casa Municipal, contrariando, según se dice, la orden comunicada por la Secretaría de la Asamblea al Ministerio de Hacienda en 14 de Diciembre último, os informa:

La Ordenanza expedida por esta Municipalidad á 30 de Noviembre de 1888, en uso de la facultad que concede el art. 73 de la Ley de Régimen Municipal, creó una contribución sobre los estanquillos ó establecimientos de venta al por menor de toda clase de licores; contribución que debió ser recaudada en este año, así como todas las demás rentas municipales, en la forma que acordare la Corporación, de estricta conformidad con el art. 64 de la misma ley.—En sesión del dos del presente, resolvióse, pues, que se celebrasen al efecto contratos de arrendamiento con la persona ó personas que mayor ventaja ofreciesen al Concejo; pero teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional había manifestado su propósito de dictar una nueva ley sobre aguardientes: que, según el decir de algunos Sres. Diputados, la reforma que se trataba de introducir en aquel ramo fiscal debía ser de tanta magnitud que acaso no subsistirían ni los estanquillos, por incompatibles con el nuevo sistema; y por último, que entonces deberían entenderse derogadas aun las leyes del Régimen Municipal, lo cual podría motivar serias dificultades, caso de arrendarse por tiempo fijo la sobredicha contribución, tal como sucedió al tratarse del gravamen subsidiario al trabajo de caminos vecinales, agregóse

que los contratos cesarían tan luego como llegase á promulgarse la proyectada ley.

Conocedor de esto el Tesorero del Cantón, y creyendo, por otra parte, que se hallaba vigente el Reglamento de contabilidad municipal dictada por el Presidente Sr. García Moreno en 1871, bajo el régimen de casi absoluta centralización administrativa, y según el cual, cuando el Municipio dispone el arrendamiento se sobreentiende la subasta, por voluntad del Poder Ejecutivo, ha procedido en el citado día 8 (*) al remate de las entradas procedentes de los estanquillos de las parroquias del Sagrario, y demás urbanas; y deseoso el propio Tesorero de economizar tiempo, no ha esperado que la resolución del 2 del presente fuese comunicada al Sr. Jefe Político para su cumplimiento, como lo prescribe el art. 70 de nuestro Reglamento Interior.

Esta es la única y fiel historia del remate, ó mejor dicho, de los remates en referencia, Sr. Presidente; y así, la Comisión no encuentra más documentos que remitir al Sr. Gobernador, que los siguientes: la Ordenanza de 30 de Noviembre de 1888: el acta de la sesión del 2 de Enero de este año: las actas de todos los remates efectuados el día 8: el art. 70 del Reglamento Interior; y un certificado del Sr. Secretario, en el que se exprese si la resolución del 2 de Enero ha sido comunicada para su cumplimiento, previos los requisitos que aquel artículo prescribe. Las actas, la Ordenanza y el artículo deberán ir en copia auténtica.

Aunque por de pronto es difícil penetrar cuál fuese el fin concreto con que se ha pedido, y con tanta urgencia, los documentos al Municipio, como se habla ya de que una resolución de la Asamblea ha sido contrariada ó desobedecida, no será demás que la Comisión haga algunas observaciones al respecto, las cuales pongan en claro que ni la Municipalidad ni sus agentes tienen nada que temer con ocasión de su procedimiento relacionado con las rentas de este año.

El Poder Supremo de que la Asamblea Nacional se halla investida no está libre de formas determinadas en su ejercicio, las cuales aumentan ó disminuyen el alcance y la eficacia de las disposiciones; y de esas formas, unas se encuen-

tran prescritas en el mismo derecho natural, como que su omisión traería consigo la violación de los derechos sociales más rudimentarios, y otras se han escrito por la propia soberana Asamblea en el curso de sus sesiones, y especialmente en el Reglamento Interior.

La Asamblea se bastaba para todo en un instante, y no tenía reglas preescritas para sus actos; pero quiso ella misma que rigiese la Constitución Política expedida en 1878 hasta que llegase el momento de promulgarse otra, y desde entonces los derechos que aquella Carta concede á los individuos y Corporaciones quedaron reconocidos é invulnerables: desde entonces, hasta que otra Constitución dijese lo contrario, las Municipalidades no tienen más dependencia de la Administración General, que la expresamente establecida por la ley, y á ellas, y no á nadie, toca el decidir acerca de la creación, inversión y recaudación de sus rentas, dentro de los límites señalados por la ley, y no dentro de los que fijase cualquiera resolución que no fuese ley, ó de otra voluntad superior que no ejerciese funciones legislativas. (Art. 104).

La Asamblea Nacional podía ejercer sin límites, tanto el Poder Constituyente, como el Legislativo, Ejecutivo, Administrativo, &c., &c.; pero el 9 de Octubre organizó una que pudiéramos llamar República provisional, y desde entonces, sus funciones legislativas deben ceñirse á todo lo que para este poder prescribe la Constitución, porque ella dijo á los ecuatorianos y al mundo, que no se tenga por ley sino aquello que, previas tres discusiones y la sanción del Presidente interino que nombró, se promulgue en debida forma; y desde entonces, todo aquel que en leyes preexistentes apoye su conducta debe permanecer tranquilo, en plena posesión de sus derechos, mientras no reciba la nueva ley que modifique las anteriores.

Aparte de la trascendentalísima declaración dada el 9 de Octubre, existe la expedida el día 10, en que se aprobó el Reglamento Interior. Las leyes y decretos presuponen tres discusiones; y ninguna ley, decreto ni resolución se tiene por tal mientras no sea aprobada su redacción por la misma Asamblea. (V. Sección 8ª y art. 91).

Por último, aunque estas disposiciones no existieran, la Naturaleza prescribe que á nadie obligen los actos de la autoridad que no se hubiesen promulgado.

Ahora bien, lo que la Asamblea ha

(*) Al redactar este informe, se puso por equivocación "el día 8", sin embargo de que los remates no se habían verificado sino del 4 al 7. Este error está corregido en el segundo informe, que es el que se remitió á la Gobernación.

acordado el día 12 de Diciembre es en su forma una simple resolución, al paso que su fondo entraña una verdadera ley, por lo que respecta á las Municipalidades; y ni como ley ni como resolución ha podido comunicarse al Ministerio de Hacienda el día 14, porque sólo el 15 se aprobó el acta. Por consiguiente, esta Corporación Municipal, teniendo como tiene á su favor los artículos 104 de la Constitución del 78, el 1º del Código Civil, y 1º, 2º, 28 y 64 de la Ley de Régimen Municipal, nada tiene que temer, como se ha dicho, aun en el supuesto de que lo hecho los días 2 y 8, se hallase en pugna con lo resuelto el día 12 de Diciembre por la Asamblea.

Y si, como han dicho algunos, la moción aprobada del Diputado Sr. Pareja no ofreciese materia propia para una ley, sino precisamente para una simple resolución como la que se ha dado, resultaría que el Municipio, caso de haber contrariado tal resolución, no ha omitido el cumplimiento ó ejecución de una ley, ni se ha excedido de sus atribuciones legales.

Pero el Diputado Sr. Segundo Cueva dijo acertadamente, en el supuesto de que se trataba de impuestos en los cuales podía ingerirse el Presidente de la República, que lo que la Asamblea mandaba podía hacerlo el simple Poder Ejecutivo; lo cual manifiesta que no era la intención de la Cámara disponer nada que, separándose de la Administración General, invadiese los derechos de las Corporaciones independientes que son consideradas como individuos particulares. Y como respecto de los estanquillos, aquel Poder no tiene facultad alguna, síguese que la resolución misma de la Asamblea no perjudica al Municipio.

Se dice también que hay simple suspensión de ley; mas una suspensión que menoscaba derechos, ó impone obligaciones, y causa perjuicios irreparables, no puede menos que tener igual importancia que una ley; y si no la tiene, la ley prevalecerá sobre ella.

Aparte de lo dicho, la Comisión entiende que la pretendida contradicción no existe. La Asamblea consideró que una nueva ley estaba próxima, y para evitar conflictos quiso que se suspendan los remates. Pues bien, procurando salvar sus intereses la Municipalidad, y armonizar su procedimiento con el de la Asamblea, ha dispuesto simples arrendamientos y no remates, y no por todo el año ni por tiempo fijo, sino hasta que se promulgase la nueva ley.

El oficio del Sr. Gobernador se contrae á hablar de los remates del día 8, los cuales no son otros que los referentes á los estanquillos; mas si se tratase del ramo de introducción de aguardientes (cuyo arrendamiento en la cuota que corresponde al Municipio, dicho sea de paso, no se verifica aún, y probablemente no se verificará) á más de las razones apuntadas, se agregaría la de que la ley de 24 de Febrero de 1896, en armonía con las anteriores, deja á las Cámaras Cantonales en libertad para la recaudación en la forma que más les convenga. (V. art. 90, N°95 D. O.).

Es de creer que esta cuota tuvieron preferentemente en mira los Sres. Diputados, ya porque las leyes y los Decretos Supremos sobre aguardientes, y no la Ordenanza sobre estanquillos, viene preocupando á la Asamblea desde sus sesiones del 3er. tercio de Octubre (V. la 2ª hora de la sesión del 22, pág. 86 del D. de D.), ya porque jamás se ha entendido que las leyes fiscales en general hablen respecto de las atribuciones municipales ni las subordinen, ya en fin, porque habiendo asegurado el Diputado Sr. Pareja que los remates debían hacerse el 20 de Diciembre, se habrá referido á lo dispuesto por el Sr. General Alfaro en el Reglamento de 15 de Febrero de 96, y no á un Acuerdo municipal que podía venir ó no venir; pero según queda expuesto, si esa cuota forma todavía parte de nuestras rentas, como que sí la forma, es evidente que en la manera de recaudarla no ha podido ingerirse la Autoridad Administrativa mientras no se reformasen los artículos ya citados de la Constitución y de las leyes.

Pudiera desearse una explicación acerca de los motivos que indujeron al Concejo para preferir la forma de arrendamiento á la otra de recaudación directa por las Colecturías.—Nada más sencillo: la formación de los catastros de los estanquillos es obra de un mes por lo menos, y la ley nueva se anuncia para el presente mes de Enero. El proyecto se discute ya en el seno de la Cámara Nacional, y nosotros apenas estaríamos dando los pasos preparatorios para la complizada recaudación por medio de Colectores. La pérdida de las entradas correspondientes á este mes era, pues, segura, la cual no habría sido despreciable, atenta la escasez del fondo municipal íntegro.

Y en cuanto al gravamen sobre la introducción, es cosa bien sabida que entre nosotros la vigilancia es casi imposi-

ble en razón de la topografía misma del terreno, y que la tendencia al contrabando, aun con complicidad de los guardas, se halla siempre á la orden del día. Así, pues, sólo quien viere en el interés individual de los arrendatarios una rémora para la abundante introducción clandestina, podrá creerse perjudicado por la resolución del 2 de Enero.

Además, como el Gobierno hace hoy por medio de Colectores la recaudación de sus tres cuartas partes, la reunión de guardas nacionales y arrendatarios municipales, habría venido á multiplicar la seguridad, y por ende el provecho de ambas cajas; pues mientras los segundos procurarían esforzar cuanto sea posible la introducción para utilizar el precio de su arrendamiento, los primeros cuidarían que esa introducción pague los derechos respectivos, para aumentar ellos su tanto por ciento de premio. La combinación de estos dos intereses, en cierta manera contrapuestos, sería ventajosísima para las rentas.

Pero, desgraciadamente, el contrato á este respecto se ha dificultado por varias causas, entre las cuales puede decirse que figura la noticia que algunos han llegado á tener de la sesión de la Asamblea, á que se refiere el Sr. Gobernador.

Aquí termina el informe, Sr. Presidente, por no cansar demasiado vuestra atención; pero si llegase á ser necesario, la Comisión lo ampliará, ó suministrará los datos que pidiese la persona á quien encargaseis sostener ante cualquiera autoridad los derechos, dignidad é independencia de Corporación tan importante como el Municipio del cantón á que pertenece la Capital de la República.—Quito, Enero 16 de 1897.—Manuel R. Balarezo”.

Se ordenó devolver al S. Ingeniero su oficio en el que transcribe el del Sr. Sub-Intendente (quien le pide que, en unión de dos peritos, informe sobre el estado de la casa de la Sra. Carolina Betancourt) á fin de que examine dicha casa é informe al Concejo.

Autorizó el Concejo al Sr. Presidente para poner en toda solicitud, al tiempo de su presentación, el decreto correspondiente, pidiendo informe á la respectiva Comisión, según la naturaleza del asunto.

Se leyeron y aprobaron los dos siguientes informes recaídos, respectivamente, en las solicitudes del Juez del Rastro é Inspector de Aguas, contraída la primera á pedir aumento de carretones para el servicio del Matadero; y la

2ª, al pago de gastos de alumbrado.

“Sr. Presidente del I. C. Municipal.—De suma necesidad es el aumento de las dos carreteras, y por consiguiente de los carretoneros á que alude el Sr. Juez del Rastro. Felizmente el Supremo Gobierno ha cedido ya la cantidad de fierro angular necesario para la construcción de dichas carreteras, así que, dado el entusiasmo del Sr. Tesorero, quien se ha encargado de mandarlas construir bajo un nuevo sistema, pronto será llenada esta necesidad. Este es el informe que tengo á bien dar al I. C.—Quito, 16 de Enero de 1897.—C. Arturo Martínez”.

“Sr. P. del M. I. C.:—Era indispensable el gasto á que alude la solicitud anterior, puesto que se sujetaba á una costumbre cuya violación podía causar inconvenientes, ó menoscabar la dignidad del Municipio. Por tanto, debe aprobarse el gasto, y aplicarse á extraordinarios é imprevistos, por ser de esa naturaleza la inversión.—Es nuestro parecer salvo el acertado del I. C.—Federico Guillén”.

Se leyó y aprobó el siguiente informe de la Comisión de Instrucción Pública, recaído á la solicitud de la Junta Inspectora de la parroquia de Conocoto.

“Sr. Presidente del I. C. Municipal.—Habiendo esta Municipalidad, en el año próximo pasado, votado 500 S/ para útiles de enseñanza de las escuelas fiscales de este Cantón; parece muy del caso, que de la expresada suma se saquen los 50 S/ que, para idéntico objeto se solicita en la petición que antecede.

A este efecto, debe enviarse esta cantidad al Sr. Teniente Político de la parroquia de Conocoto, para que en asocio de los Institutores respectivos, así como de los Miembros de la Junta Inspectora, procedan á hacer la inversión de la referida cantidad, en útiles de mayor necesidad para las escuelas de la aludida parroquia.

A fin de que esta inversión sea legalmente hecha, debe imponérsele al expresado Teniente Político, la obligación de presentar una cuenta documentada de dichos gastos.

De igual manera, opinamos que la Presidencia de este Concejo debe oficiar al prenombrado Teniente Político, encargándole que, de una manera muy especial cuide que los padres de familia de la parroquia de su jurisdicción, no descuiden el sagrado deber que tienen de educar á sus hijos.

Tal es, Sr. Presidente, el parecer de vuestra Comisión, salvo mejor juicio de este I. Concejo.—Quito, Enero 16 de

1897.—Escudero.—Vivanco”.

Los Sres. Andrade, Balarezo, Escudero y Procurador Síndico, después de leído ese informe, expusieron sucesivamente que, existiendo todavía fondos de lo votado para gastos de instrucción pública, á más de los 500 \$ que el Concejo, en sesión del 12 de Noviembre, ha ordenado distribuir á las escuelas de las parroquias urbanas, justo era también atender á los de las rurales; ora porque estas parroquias contribuyen con mucho, á la formación de aquellos fondos, ora porque sus escuelas son las más necesitadas. Que la distribución de útiles de enseñanza ó de dinero que se haga á estas, debe ser proporcional á las necesidades de cada una y á la importancia de la parroquia á que pertenece; tomándose precauciones, caso de dárseles dinero, dirigidas á asegurar su legítima inversión.

Se acordó suspender la votación del siguiente informe recaído en la solicitud del Sr. Comisario 2º Municipal, sobre venta de un caballo, para que lo amplíe la Comisión, tomando datos acerca de la identidad y estado de dicho caballo.

“Sr. Presidente del I. C. Municipal.—Es muy justa la solicitud anterior, por lo que, vuestra Comisión opina, que se faculte al Sr. Tesorero, para que en asociación con el Juez de Aguas y el peticionario, proceda á hacer la venta del caballo perteneciente á la Comisaría Municipal y se adquiera otro, aumentado el valor necesario para comprar otro.—Quito, Enero 16 de 1897.—Escudero.—Vivanco”.

Eligió el Concejo al Sr. Dr. Vivanco para miembro de la Junta que ha de entender en las inscripciones de ciudadanos que quieran obtener boletas de exención del servicio de guardias nacionales.

Después de corto receso, el Concejo eligió para jueces civiles principales 1º y 2º de la parroquia de Lloa á los Sres. Miguel Piedra y Heliodoro Jaramillo, respectivamente.

El Sr. Tesorero expuso que había espirado el plazo señalado para los remates de impuestos; que no se había hecho todavía el de estanquillos correspondiente á cinco parroquias; el de la cuota correspondiente al Municipio sobre el de introducción de aguardientes, ni el de chicherías.

En consecuencia, el Sr. Balarezo, con apoyo del Sr. Cárdenas, hizo la proposición siguiente, que fué aprobada: “Que para el remate del impuesto á los estan-

quillos y chicherías se prorrogue el plazo hasta el 20 del presente, y que la cuota del impuesto á la introducción de aguardientes se reeade directamente; ya que, hasta la fecha, no se ha presentado nadie que acepte las condiciones requeridas para su remate”.

El Concejo nombró al Sr. Dr. Julián Andrade para miembro de la Comisión de remates de impuestos, en reemplazo del Sr. César Bueno.

Atendiendo al recargo del trabajo de la Secretaría y á la instalación de la Junta Cívica de inscripciones el día 20 del presente, el Concejo nombró amanuense interino al Sr. Manuel Villagómez.

El Sr. Escudero, con apoyo del Sr. Vivanco, hizo la proposición siguiente, que fué aprobada: “Que á dicho amanuense interino se le asigne el mismo tanto de sueldo que tienen los permanentes.

Terminó la Junta.

El Presidente, *Lino Cárdenas*.

El Secretario, *D. Román*.

83 Sesión ordinaria del 19 de Enero de 1897.

Abierta con los Sres. Presidente, Ante, Escudero, Navarro, Vivanco, Procurador Síndico é Ingeniero Municipal, se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Se ordenó pasar al Ingeniero Municipal el oficio del Sr. Sub-Intendente de Policía, contraído á exponer el peligro consiguiente al uso que hace el público de las aguas que salen del Lazareto, para que con vista del informe de aquel empleado, la Comisión respectiva emita el suyo.

Se mandó transcribir al Sr. Intendente de Policía una nota del Sr. Mariano C. Barriga, quien avisa que ha abierto una botica con el nombre de “*Botica Nacional*”, bajo la casa de la Sra. Dolores Caamaño, Carrera Bolívar. El Concejo autorizó al Sr. Presidente para nombrar la Comisión examinadora de aquel Establecimiento.

Nombró el Concejo á los Sres. Dres. Andrade y Balarezo para que entiendan con el Dr. Luis Felipe Borja, sobre una reclamación que hace este Señor de todos los remanentes de la fuente de la Plaza “Sucre”.

Facultó el Concejo al Sr. Presidente para que se dirija á la autoridad respec-

tiva, á fin de evitar los daños que causan las salvas de artillería que se hacen en la Plaza de la Independencia; y para que tome las medidas conducentes á la conservación de las obras de la Plaza "Sucre", según que lo insinúa el Sr. Ingeniero Municipal, en oficio del 10 del corriente.

Se ordenó pasar á la Comisión de Obras Públicas un oficio del mismo Ingeniero, quien consulta si está vigente la Ordenanza de 1.^o de Julio de 1890, y pide, caso de estar, que se la ponga en práctica.

Se dió lectura al siguiente informe recaído en la solicitud del Sr. Schmidt, quien pide que el Concejo reciba las pilas de la Plaza "Sucre":

"Sr. Presidente del I. C. Municipal.—He estudiado detenidamente las pilas de la Plaza "Sucre", y en tal virtud, tengo á bien presentar el siguiente informe:

Las pilas están bien colocadas, y bien ejecutados todos los trabajos concernientes á las mismas.

Respecto de los surtidores me permito hacer las siguientes observaciones: 1.^a El surtidor colocado en la Carrera de Maldonado no da agua sino por uno de los tubos. 2.^a La colocación de éstos debe ser más firme. 3.^a Sería de desear que bajo los chorros haya receptáculos en donde pueda recogerse el agua, para que de allí la tome el público, pues siendo, como es, muy pequeña la cantidad que arrojan los tubos, los aguadores acuden, por no esperar, á tomarla de las pilas.

Este es el parecer de vuestra Comisión, salvo el más acertado del I. C.—Quito, 18 de Enero de 1897.—C. Arturo Martínez".

Por insinuación del Sr. Procurador Síndico, el Concejo encargó á la Comisión de Obras Públicas y al mismo Sr. Síndico entiendan en la recepción de dichas pilas, si el empresario ha cumplido con las condiciones de su contrato, que debe ser examinado previamente, con las observaciones del anterior informe.

Fueron aprobados los siguientes informes recaídos respectivamente: en la solicitud del alguacil Daniel Yépez, quien pide se compre cuatro faroles y cinco lamparillas para la cárcel; en las de las Sras. Rosario del Alcázar y Mariana Alcázar v. de García, quienes exponen que no les cumple pagar á la Municipalidad los respectivos réditos censíticos que gravan sus fundos Changalá y Cumbigín, por haber sido éstos arruinados por la confiscación; en la del Sr. Gualberto Pé-

rez, quien propone bajar 0,80 etms. la altura de la calle de la esquina de Santa Catalina y reformarlas 4 que converjen á ese punto; en la de Gaspar Sandoval, quien pide se ordene al Sr. Tesorero suspender la exigencia de pago de la cuota que debe por la compostura de la calle en que está su casa, hasta que se remate ésta; en la de Gabriela Nieto, quien pide que en el tajamar contiguo á su casa, se ponga compuerta de hierro y se hagan otras reparaciones; en la de Luis Felipe López, quien pide en arrendamiento unos callejones situados dentro de su quinta, sita en Chillogallo; y en la del Comisario 2.^o Municipal, quien pide un caballo para su servicio.

"Sr. Presidente del M. I. C. M.—Sr.:—Para el alumbrado de la cárcel son necesarios los faroles y lamparillas que pide el Sr. alguacil; por tanto, vuestra Comisión opina que se le debe dar esos artículos, más siendo el costo tan pequeño, salvo el mejor criterio de esta I. Corporación.—Quito, Enero 16 de 1897.—P. I. Navarro".

"Sr. Presidente:—Como la finca gravada con el censo, no ha desaparecido ni se ha hecho totalmente infructífera á causa de la confiscación, no se ha extinguido dicho censo, y por tanto, subsiste la obligación de pagar los réditos censíticos. Claro es á este respecto el art. 2021 del Código Civil. Por tanto, debe desecharse la solicitud precedente.

Tal es el parecer del suscrito Procurador Síndico, salvo el más acertado del Muy Ilustre Municipio.—Quito, Enero 19 de 1897.—Francisco Andrade Marín".

(Concluirá).

AVISOS.

3

El Concejo necesita seis pares de bueyes para el servicio de las carretas de la Casa de Rastro. Quien quiera venderlos puede entenderse con el Sr. Tesorero Municipal Dr. Federico Guillén.

Se va á inscribir la escritura pública por la cual Vicente Buenaño vende á Dario López una acción hereditaria en una casa situada en la parroquia de San Sebastián de esta ciudad.

Imprenta Municipal.